

I

La consulta plantea el modo en que deberá producirse la conciliación de las obligaciones impuestas a la consultante por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales, en relación con el supuesto planteado a aquélla en que un trabajador que pretende someterse voluntariamente a las acciones de vigilancia de la salud previstas en el artículo 22.1 de la segunda de las Leyes citadas no acepta la firma del documento por el que presta su consentimiento al tratamiento de los datos de salud relacionados con dichas acciones.

A tal efecto, la consulta analiza detenidamente la aplicación de las disposiciones relacionadas con el derecho fundamental a la protección de datos contenidas en la Ley 31/1995, exponiendo el supuesto planteado contra la misma en sede judicial en que habiendo sido desestimadas las pretensiones del trabajador por el Juzgado de lo Social, el Tribunal Superior de Justicia competente ha estimado el recurso de suplicación interpuesto por aquél, considerando que la consultante no puede exigir la firma del citado documento para la realización de las acciones de vigilancia de la salud a las que se viene haciendo referencia.

En todo caso, debe señalarse que las consideraciones efectuadas en el presente informe habrán de ser entendidas al margen del contenido de las resoluciones judiciales a las que se refiere la consulta, respecto de las cuales no procede emitir parecer alguno por parte de esta Agencia Española de Protección de Datos.

II

Dicho esto, como es sobradamente conocido por la consultante, el tratamiento y comunicación de datos de carácter personal, cuyo régimen aparece recogido con carácter general en los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, se encuentra, por vía de excepción, sometido a particulares restricciones en lo que a los datos de salud respecta, por el artículo 7 de la citada Ley Orgánica, cuyo apartado 3 establece como regla general que “Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado consienta

expresamente". Esta regla únicamente es matizada por la Ley Orgánica en sus artículos 7.6 y 8.

Por otra parte, esta Agencia se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en relación con los tratamientos de datos de carácter personal vinculados a la realización de las acciones de vigilancia de la salud previstas en la Ley 31/1995.

Así, en primer lugar, en los supuestos en los que dichas acciones son llevadas a cabo por un servicio de prevención propio, como sucede en el supuesto planteado en la consulta se ha considerado que el acceso a los datos meramente identificativos de los trabajadores por parte del servicio de prevención encontraría su amparo en lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999, a cuyo tenor "No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal (...) se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento".

En efecto, sin perjuicio de que el sometimiento a las acciones de vigilancia de la salud tenga como regla general, en esto se discrepa de lo analizado en la consulta, carácter voluntario, quedando sujeto a la decisión y consentimiento del trabajador, es obligación del empresario poner a disposición del mismo la posibilidad de someterse a dichas acciones (obviamente también será obligación del trabajador someterse a aquéllas cuando ello no dependa de su consentimiento).

De este modo, el que el servicio de prevención pueda acceder a la relación nominal de los trabajadores de la empresa será condición necesaria para que el trabajador pueda, en uso de los derechos que le confiere la Ley 31/1995, someterse a la práctica de los reconocimientos que el empresario está obligado a poner a su disposición. Por ello, el uso de los datos identificativos por parte del servicio de prevención no sería sino desenvolvimiento de las obligaciones del empresario derivadas de la relación laboral que le une con el trabajador.

III

En cuanto a la legitimación para el tratamiento de los datos relacionados con los resultados de la práctica de los reconocimientos, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 31/1995, tanto en relación con la posible práctica de los mismos como en lo que atañe al acceso a los datos.

Así, en relación con la primera de las cuestiones, el artículo 22.1 dispone lo siguiente:

“El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

*Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo **cuando el trabajador preste su consentimiento**. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.*

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.”

De lo dispuesto en el precepto se desprende que será preciso el consentimiento del trabajador, como regla general, para la realización de las acciones de vigilancia de la salud, a menos que concurra alguna de las excepciones previstas en el párrafo segundo del artículo.

Por su parte, en cuanto a la legitimación para el tratamiento de los datos resultantes de las revisiones periódicas mencionadas, el artículo 22.2 dispone que “Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud”. A su vez, aclara el artículo 22.4 que:

“Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.



*No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención **serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos** efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva.”*

Las consecuencias de este precepto afectan, obviamente al alcance de la información a la que podrá tener acceso cada uno de los agentes involucrados en las acciones de vigilancia de la salud, pero al mismo tiempo delimita los supuestos en los que la Ley legitima el tratamiento de estos datos de salud sin contar con el consentimiento del interesado; es decir, los supuestos en los que el mencionado consentimiento quedará exceptuado por así preverlo una norma con rango suficiente.

Así, una vez efectuadas las acciones de vigilancia de la salud, el acceso y tratamiento de los datos de carácter personal relacionados con la práctica de los reconocimientos podrá realizarse sin consentimiento del interesado por el personal médico que realiza aquéllos, pudiendo además ser objeto de comunicación a las autoridades sanitarias. En los restantes supuestos, la cesión de los datos quedará vedada salvo que el trabajador así lo consienta expresamente, limitación que también será aplicable al acceso a los datos por cualquier persona al servicio del empresario distinta al personal médico cuando nos encontremos ante un servicio de prevención propio.

Al propio tiempo, el empresario únicamente podrá conocer y tratar el dato de salud referido a la aptitud del trabajador para el desempeño de un determinado puesto de trabajo, resultando contrario a la Ley el tratamiento, e incluso el mero conocimiento, de cualquier otra información relacionada con las acciones de vigilancia de la salud del trabajador.

IV

La conclusión que acaba de alcanzarse, del análisis de los apartados 1 y 4 del artículo 22 de la Ley 31/2002 resulta sumamente relevante para resolver la cuestión planteada en el presente caso, por cuanto el tratamiento que el personal médico haga de los datos de salud de aquellos trabajadores que voluntariamente acepten someterse a las acciones de vigilancia de la salud no quedará sujeto a su consentimiento para la realización del tratamiento, sino que vendrá inmediatamente impuesto por la Ley, encontrándose así amparado el tratamiento en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999 en conexión con el artículo 22.4 de la Ley 31/1995.

En consecuencia, el único consentimiento que la Ley 31/1995 impone es que el trabajador habrá de prestar para someterse a las acciones de vigilancia de la salud, cuando éstas tengan un carácter voluntario. Sin embargo, una vez aceptado el sometimiento al reconocimiento, no será preciso que el trabajador preste un consentimiento adicional para el tratamiento, por el personal médico, de los datos relacionados con la salud que resulten de la realización de los reconocimientos, dado que la Ley impone el acceso por el personal médico a dichos resultados.

Además, debe recordarse que el artículo 22.4 prevé el mencionado acceso en relación expresa con “la información médica de carácter personal”, lo que obviamente implica que los datos objeto de tratamiento como consecuencia e la realización de estas acciones aparecerán vinculados a aquéllos otros que identifican al trabajador sometido a los reconocimientos.

Por este motivo, la conclusión que cabe alcanzar de todo lo que se ha venido indicando es que el empresario (o en su caso el servicio de prevención) no necesita el consentimiento expreso del afectado para el tratamiento de sus datos relacionados con la salud y referidos a las acciones de vigilancia de la salud en caso de que éste haya consentido en someterse a estas acciones. Por tanto, únicamente será exigible por imperativo de la Ley que el trabajador haya consentido en que se lleven a cabo respecto del mismo las acciones de vigilancia de la salud.

V

Sentado lo anterior, la Ley 31/1995 no impone ninguna exigencia especial al consentimiento prestado por el trabajador para la realización de estas acciones, pudiendo entenderse que dicho consentimiento se derivará de la solicitud del propio trabajador, de su personación en el lugar y fecha en que sea citado para la realización de los reconocimientos o de cualquier otra acción llevada a cabo por el mismo en el sentido de autorizar la realización de las acciones de vigilancia de la salud. En consecuencia, no sería indispensable que el trabajador firmase un documento consintiendo la realización de las acciones de vigilancia de la salud, pudiendo bastar para entender prestado el citado consentimiento la realización por aquél de alguna de las conductas a las que nos hemos referido.

No obstante, el tratamiento de los datos relacionados con la salud del trabajador queda sometido a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999. Si bien ya se ha indicado que de lo dispuesto en la misma y en el artículo 22.4 de la Ley 31/1995 se desprende que no será necesario el consentimiento del



interesado para el tratamiento de sus datos de salud por el personal médico del servicio de prevención, sí sería por el contrario necesario informar a aquél acerca del citado tratamiento en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999.

En este sentido, debe recordarse que, a diferencia con lo que sucede en los supuestos en que los datos no son recabados del interesado, el artículo 5.1 de la Ley Orgánica impone, sin excepción, la obligación de informar al interesado del que se recojan los datos de los extremos contenidos en este precepto.

No debe olvidarse, por otra parte, que el artículo 18.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, dispone que “El deber de información al que se refiere el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, deberá llevarse a cabo a través de un medio que permita acreditar su cumplimiento, debiendo conservarse mientras persista el tratamiento de los datos del afectado”.

Ciertamente esta Agencia ha considerado que en supuestos excepcionales, como los contemplados en la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, o los analizados en informe de 1 de agosto de 2007, referido al tratamiento de datos derivado del pago de productos o servicios mediante tarjeta de crédito u otro instrumento similar, será posible dar cumplimiento al deber de informar mediante la instalación de algún tipo de cartel informativo claramente visible y legible por los afectados; no obstante, las garantías de prueba exigidas por el artículo 18.1 al que nos acabamos de recibir serán mayores en tanto pueda acreditarse que el interesado ha sido informado por escrito y de forma personalizada acerca del tratamiento de sus datos.

El contenido del deber de información queda suficientemente cumplido a través de la cláusula aportada en la consulta, si bien no será preciso, conforme a todo lo que ha venido siendo indicado, solicitar el consentimiento del afectado para el tratamiento de sus datos de salud, que vendrá directamente impuesto por lo previsto en el artículo 22.4 de la Ley 31/1995 en relación con el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999.

Así, bastaría para que la entidad consultante diera cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 la acreditación de que el documento en que se informa al afectado acerca del tratamiento de sus datos de salud en los términos analizados en la consulta se incorpora a la documentación facilitada al trabajador como consecuencia de la realización de las acciones de vigilancia de la salud. De este modo, se conciliaría el cumplimiento del citado deber con lo indicado en las resoluciones judiciales aportadas.

VI

En conclusión, no será preciso recabar el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de salud derivados de la realización de las acciones de vigilancia de la salud que él mismo hubiera consentido, si bien será preciso incorporar a la documentación que se facilite a aquél un documento informativo sobre el tratamiento de tales datos, en los términos que se contienen en el impreso aportado en la consulta.